CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 172/2025
ACTOR: MUNICIPIO DE GUANAJUATO, ESTADO DE GUANAJUATO
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

En la Ciudad de México, treinta de junio dos mil veinticinco, se da cuenta al **Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, instructor en el presente asunto**, con lo siguiente:

Constancias	Registro
Expediente de la controversia constitucional 172/2025 , promovida por el apoderado legal del Ayuntamiento de Guanajuato, Estado de Guanajuato.	9675

La demanda y anexos fueron depositados el seis de mayo de dos mil veinticinco en la oficina de correos de la localidad y recibidos el dieciséis siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, siendo turnado el expediente conforme al auto de radicación de la veintiséis de mayo del presente año y publicado el tres de junio siguiente.
Conste.

Ciudad de México, a treinta de junio de dos mil veinticinco.

Visto el escrito de demanda suscrito por quien se ostenta como apoderado legal del Ayuntamiento de Guanajuato, Estado de Guanajuato, quien promueve controversia constitucional, en contra del Congreso de la Unión, en la que impugna lo siguiente:

“IV.- La norma general, acto u omisión cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado:

El (sic) la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en (sic) el Diario Oficial de la Federación el 20 veinte de marzo de 2025 dos mil veinticinco, por considerar que dicha norma general es inválida por contravenir a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se reclaman las consecuencias que de hecho y por derecho, se deriven o pudieran derivarse de la norma general mencionada.”

I. Prevención. Atento al contenido de la demanda y anexos remitidos, se advierte que, previamente a decidir lo que en derecho proceda respecto de la interposición de la presente controversia constitucional, resulta necesario establecer si el promovente cuenta con la legitimación para acudir a este medio de control constitucional en representación del Municipio de Guanajuato, Estado de Guanajuato.

Lo anterior, ya que de conformidad con el artículo 11, párrafo primero de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el actor, el demandado y en su caso, el tercero interesado, deben de comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que conforme a las normas que los rigen estén facultados para representarlos y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 172/2025

contrario, siendo ésta la única forma de representación permitida. Por tanto, para acreditar la representación de quien actúa en nombre de un ente público, debe estarse en principio a lo dispuesto en la legislación ordinaria que prevé dichas facultades.

En ese sentido, la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato establece en su artículo 27, fracciones I y II, que la atribución exclusiva de la representación legal del municipio en los litigios en que éste sea parte le corresponde al síndico del ayuntamiento, como se advierte a continuación:

“Artículo 27. Las personas titulares de la sindicatura tendrán las siguientes atribuciones:

I. Procurar, defender y promover los intereses municipales en los juicios en que sea parte y presentar trimestralmente al Ayuntamiento el informe del estado que guardan los asuntos;

II. Representar legalmente al Ayuntamiento en los litigios en que éste sea parte **y con autorización del Ayuntamiento delegar esta representación;** [...].”

[Lo resaltado es propio].

No obstante, la fracción II del artículo citado también señala que el síndico puede delegar la facultad de representación cuando así lo autorice el Ayuntamiento, es decir que para que dicho funcionario pueda delegar esta atribución a un tercero debe haber sido aprobado previamente por el cuerpo colegiado que integra el Ayuntamiento.

Ahora bien, en el caso quien acude a promover la presente controversia constitucional en representación del Municipio de Guanajuato, Estado de Guanajuato, se ostenta como *apoderado legal del Ayuntamiento*, y para efecto de acreditar la personalidad con la que pretende comparecer, exhibe copias certificadas del acta de la sesión de cabildo celebrada el diez de octubre de dos mil veinticuatro, así como del instrumento notarial que contiene un poder general para pleitos y cobranzas suscrito entre otros, por el síndico municipal.

Del contenido del acta de sesión de cabildo de diez de octubre de dos mil veinticuatro se advierte que, entre los asuntos del orden del día que se solventaron, **se aprobó** por los miembros del Ayuntamiento de Guanajuato el punto de acuerdo número siete consistente en la distribución de atribuciones que ejercerán cada una de las personas titulares de las sindicaturas del Ayuntamiento, el cual en lo que interesa, establece lo siguiente:

“Acuerdo:

[...]

Tercero. El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, en términos de la consideración tercera, aprueba la propuesta presentada por la

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 172/2025

Presidente Municipal, debido a lo cual, se acuerda que la distribución equitativa de las atribuciones que ejercerán cada una de las personas titulares de la Sindicatura, será del tenor siguiente:

- *El Síndico, Licenciado Ángel Ernesto Araujo Betanzos, ejercerá las atribuciones enlistadas en las fracciones I, II y IV, del artículo 27 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, para lo cual, **se le autoriza a delegar la representación legal del Ayuntamiento en los litigios en que éste sea parte, a favor de las y los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Servicios Jurídicos del Municipio de Guanajuato, mediante instrumento jurídico respectivo; [...].***

[Lo resaltado es propio].

Por su parte, en el instrumento notarial que acompañó al escrito de demanda se observa el nombre de las personas a quienes se les otorgó el poder general para pleitos y cobranzas con el que pueden ejercitar conjunta o separadamente la representación del Municipio de Guanajuato ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, suscrito por el síndico del Ayuntamiento Ángel Ernesto Araujo Betanzos.

Asumiendo que el otorgamiento de un poder pueda interpretarse como un acto de delegación, lo cierto es que del contenido del instrumento referido, no se advierte que las personas mencionadas hayan sido reconocidas como servidoras o servidores públicos adscritos a la Dirección General de Servicios Jurídicos del Municipio de Guanajuato, ni tampoco se observa que el promovente haya acompañado algún otro documento o constancia con la que acredite que es un servidor público adscrito a dicha Dirección General de Servicios Jurídicos, lo que constituye **un requisito indispensable** que el propio Ayuntamiento acordó en la sesión de cabildo de diez de octubre de dos mil veinticuatro para aprobar la facultad del referido síndico municipal para delegar la representación legal.

Por tal motivo, con fundamento en el artículo 28 de la Ley Reglamentaria de la materia, **se previene** al **Municipio de Guanajuato, Estado de Guanajuato**, para que en el **plazo de cinco días hábiles**, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, **quien suscribe la demanda envíe copia certificada del nombramiento que lo acredite como servidor público adscrito a la Dirección General de Servicios Jurídicos del Municipio de Guanajuato.**

Lo anterior bajo el apercibimiento de que, en caso de no cumplir con lo indicado, **se decidirá lo que en derecho proceda respecto de la procedencia de la presente controversia constitucional, únicamente con los elementos que obren en autos.**

Por otra parte, en vista de la omisión del promovente, **se requiere al Municipio** para que, en ese mismo plazo, **señale un domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad sede de este Alto Tribunal**, o bien, **solicite la recepción de notificaciones electrónicas**, apercibido que, de lo contrario, aquellas notificaciones que por su trascendencia o urgencia tengan que practicarse por oficio, se le realizarán por medio de lista, hasta en tanto cumpla con lo indicado.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 5 de la Ley Reglamentaria, 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 1 de la citada Ley Reglamentaria; 12 y 17 del **Acuerdo General 8/2020**, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como con apoyo en la tesis de rubro: **“CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS PARTES ESTÁN OBLIGADAS A SEÑALAR DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL LUGAR EN QUE TIENE SU SEDE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 305 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA)”**¹.

En ese sentido, se hace de conocimiento a la autoridad que, en caso de solicitar la recepción de notificaciones electrónicas, deberá de realizarlo por conducto de quien legalmente lo representa, quien deberá proporcionar para tal efecto su Clave Única de Registro de Población (CURP), así como la de aquellos para los cuales solicite la autorización correspondiente, en el entendido que deberán contar con su firma electrónica (FIREL) o e.firma vigente, conforme a lo indicado en los citados preceptos del **Acuerdo General 8/2020**.

II. Habilitación de días y horas. Por la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, con apoyo en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, **se habilitan los días y las horas** que se requieran para llevar a cabo la notificación de este acuerdo.

Notifíquese. Por lista y por única ocasión en su residencia oficial al Municipio de Guanajuato, Estado de Guanajuato.

En ese orden de ideas, **remítase la versión digitalizada del presente acuerdo**, a la **Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato**, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por conducto del **MINTERSCJN**, regulado en el **Acuerdo General**

¹ **Tesis IX/2000**, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de dos mil, página 796, número de registro 192289.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 172/2025

12/2014, a fin de que genere la boleta que le corresponda y la envíe al órgano jurisdiccional en turno, para que con sustento en los artículos 137 de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación², 4, párrafo primero y 5 de la Ley Reglamentaria, **lleve a cabo la diligencia de notificación por oficio al Municipio de Guanajuato, Estado de Guanajuato**, en su residencia oficial de lo ya indicado; además de que para los efectos de lo previsto en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, la copia digitalizada de este acuerdo, en la que conste la evidencia criptográfica de la firma electrónica del servidor público responsable de su remisión por el **MINTERSCJN**, hace las veces del **despacho 483/2025**, por lo que se requiere al órgano jurisdiccional respectivo, a fin de que en auxilio de las labores de este Alto Tribunal, a la brevedad posible lo devuelva debidamente diligenciado por ese medio, **incluyendo la constancia de notificación y la razón actuarial respectiva.**

Lo proveyó y firma el **Ministro instructor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena**, quien actúa con el **Licenciado Eduardo Aranda Martínez**, Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.

Esta hoja forma parte del acuerdo de treinta de junio de dos mil veinticinco, dictado por el **Ministro instructor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena**, en la controversia constitucional **172/2025**, promovida por el **Municipio de Guanajuato, Estado de Guanajuato**. Conste.

DVH

² En términos del **artículo Tercero Transitorio de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación**, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, que establece lo siguiente:

Tercero.- Hasta en tanto las Ministras y Ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1o. de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se regirá para todos los efectos por las atribuciones, competencias, obligaciones, reglas de votación, faltas, licencias y demás disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021; con excepción de la materia electoral tal como está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, hasta la fecha señalada en el enunciado anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguirá funcionando en Pleno o en Salas.